



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
22 de septiembre de 2020  
Español  
Original: francés e inglés

### **Carta de fecha 21 de septiembre de 2020 dirigida al Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad**

Tengo el honor de adjuntar a la presente una copia de las exposiciones informativas ofrecidas por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Sr. Mark Lowcock; el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Sr. Qu Dongyu; y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Sr. David Beasley, así como de las declaraciones formuladas por los representantes de China, la República Dominicana, Estonia, Francia, Indonesia, el Níger, la Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Viet Nam, en relación con la videoconferencia sobre la protección de los civiles en los conflictos armados convocada el jueves 17 de septiembre de 2020.

De conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 7 de mayo de 2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo (S/2020/372), acordado a raíz de las circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus, las exposiciones informativas y las declaraciones se publicarán como documento oficial del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Abdou **Abarry**  
Presidente del Consejo de Seguridad



**Anexo I****Declaración del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock**

Hace dos años, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2417 (2018), en la que se pedía que se informase rápidamente al Consejo sobre los riesgos de hambruna y de inseguridad alimentaria generalizada derivados de los conflictos. Es por ello que hoy, junto con Qu Dongyu y David Beasley, intervengo ante los miembros para destacar la creciente inseguridad alimentaria y el riesgo de hambruna en diversos países.

La hambruna ha existido durante toda la historia de la humanidad y prácticamente todos los países la han sufrido. Sin embargo, cabe señalar que el mundo ha logrado prevenirla mucho mejor a finales del siglo XX y principios del XXI. Ahora la hambruna es menos frecuente y menos mortífera, principalmente por tres razones.

En primer lugar, la productividad y el rendimiento de la agricultura han aumentado. Existe una mayor disponibilidad de alimentos, y estos son más asequibles para millones de personas.

En segundo lugar, el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente, y su poder adquisitivo ha aumentado. En los últimos decenios, la tasa de pobreza extrema ha disminuido, pasando de representar cerca del 36 % de la población mundial en 1990 a un 10 % en 2015.

Asimismo, en tercer lugar, en las ocasiones en que se ha planteado una amenaza de hambruna, los países y las organizaciones han dejado de lado sus diferencias y han compartido conocimientos y recursos con miras a evitar una crisis mediante una acción decisiva.

Antes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la cual, lamentablemente, podría desbaratar los logros anteriores, habíamos llegado a un punto en que el riesgo de hambruna se circunscribía a las zonas en conflicto. Ese es uno de los motivos de la importancia de la resolución 2417 (2018), en la que se reconocen explícitamente los vínculos entre el conflicto armado, la inseguridad alimentaria y la amenaza de hambruna.

Dichos vínculos son evidentes. Los conflictos alteran todos los aspectos de la vida. Los civiles resultan heridos o muertos. Se ven expulsados de sus hogares y pierden tierras y medios de subsistencia. Las granjas, los suministros alimentarios, el ganado, la infraestructura y los servicios públicos quedan dañados o destruidos. Todo ello eleva el precio de los alimentos y de otros bienes de primera necesidad, como el agua y el combustible. Con el tiempo, los conflictos desgarran el tejido social, socavan las instituciones públicas y erosionan el crecimiento económico y el desarrollo. El costo humano y económico es astronómico. En los diez países más afectados, el costo promedio de los conflictos se estima en aproximadamente un 40 % del producto interno bruto.

Además, ahora vemos que la COVID-19 está causando un gran empeoramiento del hambre. Gracias al informe de 2019 de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, sabemos que 135 millones de personas ya se enfrentaban a una situación de inseguridad alimentaria aguda antes de la COVID-19. Ahora, David Beasley y sus colegas del Programa Mundial de Alimentos prevén que la cifra de personas aquejadas de hambre aguda llegue casi a duplicarse durante este año, hasta ascender a 270 millones de personas. Asimismo, el Banco Mundial pronostica que el número de personas en situación de pobreza extrema aumentará por primera vez desde el decenio de 1990. Como siempre, quienes resultan más perjudicados son los más vulnerables: las mujeres, los niños, los discapacitados y los ancianos.

David Beasley y Qu Dongyu hablarán con más detalle sobre algunos de los países que más nos preocupan, y yo mismo informé esta semana sobre dos de ellos: Sudán del Sur y el Yemen (véase S/PV.8757). Quisiera referirme brevemente a otros tres contextos.

Me preocupa especialmente la República Democrática del Congo. En la actualidad, en la República Democrática del Congo padecen inseguridad alimentaria aguda casi 22 millones de personas, lo que supone la cifra más alta del mundo, debido a que la COVID-19 se ha sumado a las repercusiones de varios decenios de conflicto.

En el nordeste de Nigeria, como indicamos al Consejo en la nota oficial, la violencia perpetrada por grupos armados extremistas no estatales es en gran medida la culpable de que estén aumentando las necesidades humanitarias. Me complace comunicar que en los últimos días hemos mantenido una colaboración constructiva con las autoridades nigerianas y que el Gobierno ha adoptado medidas significativas para mejorar el acceso a las personas necesitadas, lo que esperamos sirva como punto de partida para continuar avanzando en el futuro.

En el Sahel, el recrudecimiento de la violencia y los ataques de grupos armados han causado el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas, la mayoría de las cuales dependían de la agricultura. Alrededor de 14 millones de personas están experimentando un nivel de inseguridad alimentaria crítico o de emergencia: la cifra más alta en todo un decenio. Tan solo en Burkina Faso, 3,3 millones de personas están sufriendo inseguridad alimentaria grave, y las condiciones causantes de hambruna van en aumento.

Como expuse ante el Consejo el 9 de septiembre (véase S/2020/897), la pandemia está multiplicando drásticamente las necesidades humanitarias más generales. La situación empeorará. No creo que se haya llegado aún al pico de la pandemia, pero sus efectos indirectos ya están intensificando la pobreza, destruyendo medios de subsistencia, socavando la educación, interrumpiendo la labor de inmunización y exacerbando la inseguridad alimentaria, la fragilidad y la violencia.

La asistencia humanitaria contribuye a mitigar la inseguridad alimentaria, y el personal humanitario tiene el compromiso de permanecer en el lugar de destino y ejecutar su misión. Sin embargo, se enfrenta a riesgos intolerables. Este año, han sufrido agresiones más de 200 trabajadores humanitarios, decenas de ellos en los países que he mencionado hoy. Las operaciones humanitarias se enfrentan a ataques reiterados y a otros tipos de trabas que dificultan la circulación y el acceso.

El derecho internacional humanitario es una importante línea defensiva contra la inseguridad alimentaria en los conflictos. Está prohibido recurrir a la inanición como método de guerra, así como destruir objetos indispensables para la supervivencia de los civiles. El problema es que demasiadas personas no acatan la ley. Las partes deben permitir y facilitar el acceso humanitario y proteger al personal y los activos de asistencia humanitaria.

En el marco del sistema humanitario, estamos haciendo todo lo que podemos para atender unas necesidades cada vez mayores. No obstante, los organismos humanitarios corren el riesgo de verse saturados por la enorme magnitud de esas necesidades, las cuales, si no se incrementa considerablemente la ayuda financiera, empeorarán. Existen medidas concretas que pueden adoptar tanto el Consejo como, más en general, los Estados Miembros.

En primer lugar, pueden ejercer presión para que se llegue a soluciones políticas pacíficas y negociadas con miras a poner fin a los conflictos armados. En segundo lugar, pueden velar por que las partes en los conflictos respeten el derecho internacional humanitario. En tercer lugar, pueden paliar los efectos económicos de los conflictos armados y la violencia conexas, incluso mediante la movilización de las instituciones financieras internacionales. En cuarto lugar, y con creces lo más importante, pueden ampliar su apoyo a las operaciones humanitarias y adoptar medidas más ambiciosas para apoyar las economías de los países que afronten una situación de hambre grave y a gran escala.

La creciente inseguridad alimentaria es una de las principales consecuencias de la COVID-19, como expusimos ante el Consejo el 9 de septiembre, al informar sobre las cuestiones de las que se ocupa la resolución 2532 (2020). La historia demuestra que, incluso en pleno conflicto, es posible evitar la hambruna. Ahora bien, para ello, debemos actuar. Además, debemos actuar a tiempo, para lograr una diferencia. Lamentablemente, en demasiados lugares, el tiempo se está acabando.

## Anexo II

### **Declaración del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu**

Le agradezco, Sr. Presidente, su invitación de informar hoy al Consejo de Seguridad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acoge con sumo agrado que el Consejo de Seguridad se ocupe de esta cuestión y reconozca en todo momento la relación que existe entre los conflictos y la producción y el abastecimiento de alimentos.

Como recordarán los miembros del Consejo, Mark Lowcock, David Beasley y yo informamos al Consejo sobre este tema en abril (véase S/2020/340). Numerosos miembros pusieron de relieve el valor de la alerta temprana con la adopción temprana de medidas. Unos sistemas agroalimentarios bien establecidos son cruciales para una paz duradera, como ha quedado demostrado por el gran éxito de las revoluciones verdes y la adopción de políticas adecuadas en numerosas partes del mundo.

Desde que hablamos hace cinco meses, la situación no ha mejorado y el riesgo de hambruna se cierne sobre el Yemen, Sudán del Sur y otros países debido a los desastres naturales y los provocados por el hombre, incluidos los conflictos.

En el Yemen, la presencia continua de las langostas del desierto ha seguido amenazando la disponibilidad de alimentos. La FAO insta a todas las partes interesadas a que se esfuercen por conceder acceso a las operaciones de control para evitar que la plaga siga empeorando la situación en proceso de deterioro, en el Yemen y en otros países.

Observamos con gran alarma la situación en Burkina Faso, donde el número de personas que sufren crisis o peores niveles de inseguridad alimentaria aguda casi se ha triplicado.

Nos sentimos profundamente preocupados por el análisis más reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, que muestra que la República Democrática del Congo tiene ahora el mayor número de personas que padecen crisis o los peores niveles de inseguridad alimentaria aguda que jamás se hayan registrado en un solo país. En la actualidad, 21,8 millones de personas no tienen acceso a suficientes alimentos a diario.

En Nigeria septentrional, entre junio y agosto de 2020, el número de personas en situación de crisis y emergencia por inseguridad alimentaria aguda aumentó en un 73 % en comparación con la cifra máxima de 2019, y alcanzó casi 8,7 millones de personas.

Trágicamente, se dan muchas más situaciones en las que el conflicto y la inestabilidad, ahora también exacerbados por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), son factores que impulsan un hambre más grave y una inseguridad alimentaria más aguda. Eso es particularmente patente en las zonas en que los conflictos y otros factores, como las turbulencias económicas y las condiciones meteorológicas extremas, ya están llevando a la gente a la pobreza y el hambre.

En Somalia, 3,5 millones de personas afrontaron crisis o peores niveles de inseguridad alimentaria aguda entre julio y septiembre de 2020. Este aumento del 67 %, en comparación con el máximo de 2019, se debe a las triples perturbaciones experimentadas este año: la COVID-19, las inundaciones y el aumento de la presencia de la langosta del desierto. A pesar de que se han logrado no pocos progresos en el control de la langosta, la FAO no escatima esfuerzos por mantener las operaciones de control.

En el Sudán, el número de personas que necesitan urgentemente asistencia humanitaria aumentó en un 64 % entre junio y septiembre de 2020, y alcanzó alrededor de 9,6 millones de personas, el nivel más alto jamás registrado en el país, y las graves inundaciones siguieron exacerbando la situación.

En todo el mundo, los más afectados son los pobres de las zonas urbanas, los trabajadores informales y las comunidades de pastores, así como las personas que ya son particularmente vulnerables: los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos y las personas con discapacidades.

Necesitamos ayuda rápida y de primera necesidad para detener el hambre, necesitamos prevención y producción a nivel local, necesitamos voluntad política y necesitamos que se adopten medidas colectivas, ya que las previsiones de seguridad alimentaria en 2020 siguen empeorando.

Para ser eficaces en la lucha contra la inseguridad alimentaria aguda, debemos poner en marcha un paquete de soluciones. Las medidas humanitarias, de desarrollo y de paz deben estar bien coordinadas y ser complementarias. Nuestras medidas deben reforzarse mutuamente en los planos mundial, regional, nacional y local. Los agentes humanitarios pueden prestar primeros auxilios. Los sistemas agroalimentarios pueden desempeñar una función más sostenible para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. La buena noticia sobre las principales cosechas en 2020 es que tendremos una cosecha abundante a nivel mundial. La FAO estima que tendremos un año récord y 58 millones de toneladas por encima del resultado de 2019. Eso ha sido posible gracias a las políticas de habilitación, a la innovación, a las nuevas variedades de cultivos, a los insumos agrícolas y canales de comercialización, a la inversión y a la dura labor de millones de agricultores. La paz y la armonía duraderas pueden lograrse mediante buenas políticas e inversiones en la infraestructura agrícola y el fomento de la capacidad en materia de desarrollo rural, especialmente en las zonas de conflicto.

Creo firmemente que el Consejo puede desempeñar un papel fundamental para hacer frente a la amenaza de la inseguridad alimentaria aguda inducida por los conflictos a niveles de crisis o peores, promoviendo el diálogo entre las partes para encontrar soluciones políticas y enfoques innovadores encaminados a poner fin a los conflictos y la violencia. Esto nos permitiría aumentar las operaciones urgentes para salvar vidas y medios de subsistencia y ofrecer respuestas humanitarias y de desarrollo mejor integradas que aborden los múltiples factores de la inseguridad alimentaria aguda.

Una vez más, permítaseme asegurar al Consejo el apoyo continuo de la FAO mediante el asesoramiento en materia de políticas, la asistencia técnica, nuestra plataforma *Big Data* y servicios concretos sobre el terreno.

## Anexo III

### **Declaración del Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley**

Le agradezco, Sr. Presidente, esta oportunidad de informar hoy al Consejo de Seguridad sobre esta cuestión sumamente importante.

Hace cinco meses advertí al Consejo de que el mundo estaba al borde de una pandemia de hambre (véase S/2020/340). Una combinación tóxica de conflicto, cambio climático y la enfermedad por coronavirus (COVID-19) amenazaba con llevar a 270 millones de personas al borde de la inanición. La hambruna era una posibilidad real y aterradora en hasta tres docenas de países.

Estoy agradecido de que el mundo escuchara, respondiera y actuara. Países grandes y pequeños adoptaron medidas extraordinarias para salvar la vida de sus ciudadanos y apoyar sus economías, y gastaron 17 billones de dólares en estímulos fiscales y apoyo de los bancos centrales. El Fondo Monetario Internacional y los países del Grupo de los 20 lanzaron un salvavidas a las naciones más pobres, al suspender el pago de la deuda. Los donantes aumentaron fondos anticipados y dólares adicionales para salvar vidas. Y, con la ayuda de nuestros donantes, la comunidad humanitaria mundial lanzó una lucha mundial ingente y sin precedentes contra la COVID-19.

Junto con nuestros asociados, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) va a hacer todo lo posible para llegar a 138 millones de personas este año, lo que supone el mayor aumento de nuestra historia. Ya en los primeros seis meses de 2020, alcanzamos a 85 millones de personas.

El PMA está haciendo lo que mejor sabe hacer: adaptarse e innovar para satisfacer las demandas específicas de la pandemia; poner en marcha nuevos programas de alimentos y dinero en efectivo para apoyar a las personas que padecen hambre en las zonas urbanas; apoyar a más de 50 Gobiernos para que amplíen sus redes de seguridad y sus programas de protección social para los más vulnerables, y llevar comida nutritiva a millones de escolares que no pueden asistir a clase durante el confinamiento.

Todos los días logramos mantener a personas con vida y evitar una catástrofe humanitaria. Sin embargo, esta lucha dista de haber terminado: los 270 millones de personas que marchan hacia el borde de la inanición siguen necesitando nuestra ayuda. Estamos haciendo todo lo posible para evitar que la presa estalle. No obstante, sin los recursos que necesitamos, una ola de hambre y hambruna sigue amenazando con arrasar el planeta. Y, si lo hace, engullirá a naciones y comunidades ya debilitadas por años de conflicto e inestabilidad.

El Consejo de Seguridad adoptó una decisión histórica al aprobar la resolución 2417 (2018) y condenó el costo humano de los conflictos que se paga con el sufrimiento y el hambre. En la resolución se pedía sistemas de alerta temprana eficaz y, una vez más, estoy aquí para dar la alarma.

La crisis mundial de hambre causada por los conflictos, y ahora agravada por la COVID-19, está entrando en una nueva y peligrosa fase, especialmente en las naciones que ya están marcadas por la violencia. La amenaza de la hambruna se cierne de nuevo; así pues, tenemos que dar un paso adelante, no un paso atrás: 2021 será un año decisivo.

Desde el punto de vista financiero, 2020 fue un año récord para el PMA. Alcanzamos los 8.000 millones de dólares por primera vez en la historia, pero nuestro presupuesto se estableció antes de que llegara la pandemia. Las economías eran fuertes. Se disponía de fondos de reserva y de emergencia; pero ahora me

preocupa realmente lo que sucederá el próximo año. Sé que los Gobiernos de los países miembros están gastando miles de millones en paquetes de estímulo interno. Los presupuestos nacionales son ajustados; las reservas se están agotando, si no se han agotado ya; y las economías se contraen. Sin embargo, insto a los miembros a que no abandonen su compromiso con la asistencia humanitaria y no den la espalda a las personas que padecen hambre en el mundo.

Mientras la COVID-19 obligaba a los países de todo el mundo a cerrar, se ha destruido el equivalente a 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo y han colapsado las remesas. La repercusión ha sido más fuerte en los 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, principalmente en los países de ingresos medianos y bajos. A apenas ya de un día de trabajo para pasar hambre, viviendo al día, ahora no tienen dinero para comprar su pan cotidiano. Ello crea inevitablemente un riesgo de aumento de las tensiones y la inestabilidad sociales.

Es sumamente importante que equilibremos las medidas razonables para contener la propagación del virus teniendo en cuenta la necesidad de mantener abiertas las fronteras y en movimiento las cadenas de suministro y los flujos comerciales. También tenemos que estar atentos y evitar las consecuencias imprevistas, que podrían afectar más a los más pobres.

Hasta ahora, el virus en sí no ha sido tan mortal como muchos temían en el África Subsahariana; esa es la buena noticia. Sin embargo, su efecto ha sido devastador en otros aspectos. La School of Health and Tropical Medicine de Londres ha analizado el cierre de clínicas de vacunación en África durante el confinamiento. Calculó que por cada muerte a causa de la COVID-19 que se pueda evitar, hasta 80 niños pueden morir debido a la falta de inmunizaciones sistemáticas. Se corre un grave peligro de que mueran muchas más personas a causa de las consecuencias económicas y sociales generales causadas por la COVID-19 que del propio virus, sobre todo en África.

El apoyo constante del Consejo a los programas humanitarios es, por lo tanto, una cuestión de vida o muerte —literalmente— para millones de personas en los países que son objeto de debate hoy, y para muchos millones más en los demás países que están al borde de la inanición. Sabemos que ya hay 30 millones de personas que dependen únicamente del PMA para su supervivencia.

Permítaseme referirme a los países que figuran en el orden del día de hoy. En la República Democrática del Congo, el conflicto y la inestabilidad ya habían obligado a 15,5 millones de personas a alcanzar niveles de crisis de inseguridad alimentaria. La última evaluación indica que el recrudecimiento de la violencia y la COVID-19 han disparado ese total a casi 22 millones de personas, un aumento de un 6,5 millones. Debo advertir al Consejo que esas cifras suponen que el PMA es capaz de mantener los niveles actuales de asistencia alimentaria. Si nos vemos obligados a reducir las operaciones, el panorama es aún peor.

En el Yemen, mientras tanto, la cuenta atrás hacia la catástrofe continúa después de años de hambre provocada por el conflicto, y ahora por la pandemia de COVID-19. Veinte millones de personas ya están en crisis debido a la guerra, el colapso de la economía y la moneda, el desplome de los precios de los alimentos y la destrucción de la infraestructura pública. Consideramos que otros 3 millones de personas pueden ahora enfrentarse a la inanición debido al virus.

Ya por falta de fondos, 8,5 millones de nuestros beneficiarios en el Yemen reciben asistencia solo cada dos meses. Nos veremos obligados a recortar las raciones de los 4,5 millones restantes para diciembre si los fondos no aumentan.

La decisión de las autoridades de Ansar Allah de cerrar el aeropuerto internacional de Saná la semana pasada ha empeorado una situación ya imposible. Al ser el único aeropuerto en el norte del Yemen, es un punto de acceso fundamental para el personal humanitario. La incapacidad de que las personas entren y salgan obstaculizará nuestros esfuerzos por evitar la hambruna. Suena la alarma fuerte y clara en el Yemen, y el mundo necesita abrir los ojos a la desesperada situación del pueblo yemení antes de que la hambruna se apodere de él.

También en Nigeria, la COVID-19 está sumiendo a más personas en la inseguridad alimentaria. El análisis arroja que las medidas impuestas para contener el virus redujeron los ingresos en el 80 % de los hogares. En el nordeste del país, 4,3 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de 600.000, debido en gran parte a la COVID-19, mientras que en la gran zona urbana de Kano, el número de personas con inseguridad alimentaria se disparó de 568.000 en marzo a 1,5 millones en junio, lo que supone un aumento de 1 millón de personas.

El panorama en Sudán del Sur es igualmente preocupante, donde incluso antes de la pandemia se esperaba que 6,5 millones de personas se enfrentarían a una grave hambruna en el punto álgido de la temporada de escasez, agravada por la violencia en el estado de Yonglei en los últimos meses. Ello ha dado lugar al desplazamiento de decenas de miles de civiles, al secuestro de un gran número de mujeres y niños y a la pérdida generalizada de ganado y medios de vida. Además, los brotes del virus en zonas urbanas como Yuba podrían poner a otros 1,6 millones de personas en peligro real de morir de hambre.

Por último, aunque no figura en el orden del día de hoy, también quiero poner de relieve el desastre que se está produciendo en Burkina Faso, generado por el recrudecimiento de la violencia. El número de personas que se enfrentan a niveles de crisis de hambre se ha triplicado hasta llegar a 3,3 millones de personas, ya que la COVID-19 agrava los problemas de desplazamiento, seguridad y acceso. Para 11.000 de esas personas que viven en las provincias del norte, la hambruna en estos momentos está llamando a la puerta.

Sabemos lo que hay que hacer. Hemos avanzado mucho en la detección de las primeras señales de alerta de la hambruna y en la comprensión de sus causas y consecuencias. Sin embargo, trágicamente, hemos visto esta historia muchas veces antes. El mundo no actúa hasta que es demasiado tarde, mientras que el hambre mata, aviva las tensiones comunitarias, atiza los conflictos y la inestabilidad y obliga a las familias a abandonar sus hogares.

Hace poco, me enteré de que en América Latina las familias hambrientas han empezado a colgar banderas blancas fuera de sus casas para mostrar que necesitan ayuda. Son muchos: 17,1 millones de personas que padecen hambre extrema hoy en día, en comparación con los 4,5 millones en diciembre del año pasado. Una bandera blanca es el signo de la rendición, de la rendición. No podemos ni debemos rendirnos, ni decirnos a nosotros mismos que no hay nada que podamos hacer, porque millones de personas en todo el mundo necesitan desesperadamente nuestra ayuda.

Lo cierto es que se nos han acabado los pretextos para no actuar de manera rápida y decisiva, mientras niños, mujeres y hombres se mueren de hambre. Hoy, como trabajadores humanitarios, estamos aquí para advertir al Consejo que las presiones causadas por el conflicto y la COVID-19 están aumentando vertiginosamente, y me aterra que la presa que nos protege de la hambruna esté a punto de reventar.

No obstante, hay esperanzas en medio del caos. Los acuerdos de paz firmados en el Sudán y en Oriente Medio en las últimas semanas demuestran que, si hay un compromiso real con la paz, pueden ocurrir milagros. Ahora el mundo necesita un liderazgo político para construir la paz y evitar esa crisis de hambre, e insto a los

miembros del Consejo de Seguridad a que dirijan el camino. La resolución 2417 (2018) fue un momento histórico. Es hora de cumplir con nuestra promesa y movilizarnos de inmediato para salvar incontables vidas, en un esfuerzo por promover la paz y la estabilidad en todo el mundo.

Necesitamos a todos a bordo. Tengo entendido que los Gobiernos de todo el mundo afrontan una presión financiera sin precedentes debido a la pandemia. Por lo tanto, creo que es hora de que el sector privado dé un paso hacia delante y ayude a financiar el esfuerzo de socorro.

Tal vez algunos se pregunten por qué planteo esta cuestión en el Consejo de Seguridad, pero aprovecharé toda oportunidad que se presente para dar la voz de alarma antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos 4.900 millones de dólares para alimentar a 30 millones de personas durante un año, personas que morirán sin la asistencia del PMA.

En todo el mundo, hay más de 2.000 multimillonarios, con un patrimonio neto de 8 billones de dólares. En mi país de origen, los Estados Unidos de América, solo 12 personas tienen una fortuna de 1 billón de dólares. De hecho, los informes afirman que tres de ellas ganaron miles y miles de millones durante la pandemia de COVID-19. No me opongo a que nadie gane dinero, pero la humanidad se enfrenta a la mayor crisis de nuestras vidas.

Es hora de que quienes más tienen den un paso adelante para ayudar a los que menos tienen. Ha llegado el momento de que demuestren que aman verdaderamente a sus vecinos. El mundo los necesita en este mismo instante. Es hora de hacer lo correcto.

## Anexo IV

### **Declaración del Representante Permanente Adjunto de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang**

Agradezco al Secretario General Adjunto Lowcock, al Director General Qu Dongyu y al Director Ejecutivo Beasley por sus exposiciones informativas. También agradezco a la Secretaría la información actualizada que ha proporcionado sobre los riesgos para la seguridad alimentaria con respecto a la resolución 2417 (2018).

Según la actualización, en la República Democrática del Congo, el Yemen, el nordeste de Nigeria y Sudán del Sur la crisis alimentaria sigue siendo nefasta y afecta a millones de personas. La grave situación humanitaria de esos países merece seria atención por parte de la comunidad internacional.

De hecho, la situación en esos países representa solo una pequeña fracción de los problemas de inseguridad alimentaria inducidos por los conflictos a escala mundial. Los conflictos armados y la violencia suponen una grave amenaza a la infraestructura de producción de alimentos, obligan a las personas a abandonar sus hogares y provocan escasez de mano de obra. La obstrucción de las operaciones e instalaciones humanitarias y los daños ocasionados a estas dan lugar a crisis alimentarias, en las que un gran número de civiles padecen malnutrición y hambruna. Entretanto, las crisis alimentarias siempre llevan a un descontento creciente y constituyen caldo de cultivo para la violencia y el extremismo, exacerbando así las situaciones de inestabilidad y los conflictos.

La inseguridad alimentaria en las zonas de conflicto no solo repercute en la paz y la seguridad en los planos internacional y regional, sino también en el desarrollo nacional y en los medios de vida de la población de los países afectados. El Consejo de Seguridad debería seguir desempeñando un papel importante para encontrar una solución a este problema y romper el círculo vicioso de conflicto, violencia e inseguridad alimentaria.

Debemos promover la solución política de los conflictos y hacer todo lo posible con el fin de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria en las zonas de conflicto. China apoya el llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial y pide a todas las partes pertinentes que garanticen la plena aplicación de la resolución 2532 (2020), cumplan lo dispuesto en el derecho internacional humanitario, acuerden un alto el fuego y pongan fin a toda la violencia. El Consejo debería asumir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Debería trabajar en pro de la solución política de las controversias por medios pacíficos y diplomáticos a fin de mantener la paz y la estabilidad en las regiones afectadas. Debería hacer todo lo posible por garantizar el acceso humanitario y esforzarse por mitigar los riesgos de desastres humanitarios, incluida la inseguridad alimentaria inducida por los conflictos.

Debemos promover el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria a fin de abordar las causas raíz de los conflictos. Este año comienza la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos centrarnos en las esferas de interés común para los países en desarrollo, como la alimentación, la agricultura y la reducción de la pobreza. Deben movilizarse más recursos en apoyo de los países en desarrollo mediante la financiación, la tecnología y el desarrollo de la capacidad, a fin de lograr un mejor desarrollo económico y social y crear las condiciones necesarias para la seguridad alimentaria. El desarrollo debe estar siempre en el centro de la cooperación internacional, y es la solución decisiva para resolver los conflictos.

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) sigue propagándose por todo el mundo. Las restricciones comerciales impuestas durante la pandemia obstaculizan

el transporte de alimentos e interfiere en la industria alimentaria y las cadenas de suministro de alimentos a escala mundial. Los precios de los alimentos aumentan debido a la inestabilidad de las cadenas de suministro y el pánico del mercado. Las restricciones a los viajes transfronterizos dan lugar a escasez de mano de obra en algunas zonas, lo cual perturba el ciclo de producción estacional. La combinación de todos estos desafíos podría agravar la inseguridad alimentaria y exacerbar la crisis humanitaria en los países y las regiones afectados.

En estas circunstancias, la comunidad internacional debe reforzar su cooperación en la lucha contra la COVID-19, reconstruir la economía y reducir al mínimo los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria. Debemos asegurar la estabilidad de la industria alimentaria y las cadenas de suministro de alimentos a escala mundial reanudando la producción, sin dejar de adoptar todas las medidas preventivas necesarias relacionadas con las epidemias. Deberíamos prestar especial atención a los países en desarrollo, sobre todo a los países africanos, y proporcionarles asistencia humanitaria específica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos internacionales desempeñan un papel fundamental a ese respecto, y debemos apoyarlos.

Al ser el país en desarrollo más grande, China considera la seguridad alimentaria una prioridad en el ámbito de la gobernanza. En respuesta a los desafíos que plantea la COVID-19, China puso en marcha una campaña nacional para prevenir el desperdicio de alimentos. También colaboramos estrechamente con la FAO y nos implicamos con dinamismo en la cooperación internacional, contribuyendo así a la estabilidad del suministro de alimentos a nivel mundial. Además, estamos ayudando a otros países en desarrollo a hacer frente a la pandemia de COVID-19 y a las infestaciones de langostas mediante el intercambio de información y la asistencia técnica.

China está dispuesta a trabajar con todas las partes para poner fin a los conflictos armados, mantener la seguridad alimentaria y realizar esfuerzos incesantes en pro de la paz y el desarrollo mundiales.

**Anexo V****Declaración del Enviado Especial de la República Dominicana al Consejo de Seguridad, José Singer Weisinger**

Quisiera agradecer a la Presidencia por haber convocado esta sesión, así como a nuestros ponentes por sus presentaciones. Su presencia aquí es verdaderamente un privilegio y un testimonio de la gravedad de la situación en que se encuentran demasiados civiles en demasiados países. Nos enfrentamos a un desafío decisivo. En nuestra opinión, el primer paso para abordarlo es descubrir por qué no hemos logrado prevenir esta grave situación que podría haberse evitado.

Como señalaron nuestros ponentes, las pruebas demuestran que los conflictos armados son el principal factor de hambre y riesgo de hambruna en los países objeto de examen en el día de hoy. También hay otros múltiples factores, como la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus repercusiones económicas conexas, así como las condiciones meteorológicas extremas y otros factores, pero tenemos el mandato de abordar el conflicto y la violencia armada en el Consejo de Seguridad, y tenemos que hacerlo.

Los civiles inocentes están pagando el precio de que colectivamente no hacemos lo suficiente aquí en el Consejo para protegerlos de los conflictos y de que no los protegemos frente a las penurias económicas, el hambre y las perturbaciones externas repentinas. No estamos señalando a nadie. Simplemente, estamos reflexionando sobre el hecho de que el hambre parece ser una amenaza recurrente y persistente para los países afectados por conflictos, y sin embargo, como en 2018 y muchas veces antes, seguimos tratando de resolver un problema que podría haberse evitado en una etapa inicial.

Debemos hacerlo mejor. Tenemos que hacer de esto un punto de no retorno, desde el cual adoptemos medidas concretas de consuno aquí en el Consejo sobre una serie de cuestiones que afectan a los países que figuran en nuestro programa de trabajo a fin de evitar de manera colectiva el riesgo de que millones de personas se enfrenten a la tragedia del hambre y el riesgo de hambruna para siempre. Porque creemos en el poder del multilateralismo y la solidaridad y en el papel singular del Consejo en la construcción de puentes en favor de la paz, estamos hoy aquí para ayudar a elaborar una respuesta mundial y coordinada que responda a esos desafíos y compense nuestros fracasos.

Pedimos al Consejo y a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que adopten todas las medidas necesarias, incluido el apoyo al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial, apoyando y alentando los procesos de paz y, cuando sea necesario, exigiendo cuentas a quienes impiden el acceso humanitario. Podemos hacer todas esas cosas aquí en el Consejo.

El Consejo tiene un papel decisivo que desempeñar para garantizar que las partes en los conflictos armados respeten el derecho internacional humanitario y los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, a fin de que las organizaciones humanitarias puedan llegar a las personas afectadas, con independencia de dónde se encuentren o de quiénes sean.

También hacemos un llamamiento para que se refuercen las operaciones humanitarias y se sigan desarrollando y desplegando esfuerzos coordinados y conjuntos entre los pilares humanitario, de desarrollo y de paz, de modo que podamos garantizar eficazmente medios de vida sólidos y resilientes para las personas, mejorar el desarrollo y mitigar las necesidades humanitarias. Todo ello debe llevarse a cabo en el contexto de un entorno sólido y sostenible para consolidar y sostener la paz.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve, en efecto, la innegable necesidad de desarrollar la capacidad local a fin de crear resiliencia y dejar de depender de la

asistencia humanitaria, y debemos adoptar más medidas para apoyar esos esfuerzos. También ha puesto de manifiesto que incluso la asistencia humanitaria puede ser objeto de perturbaciones inesperadas y de incertidumbre. De las pruebas se desprende la necesidad de actuar ahora, en medio de esta crisis. Ha llegado el momento de intensificar la solidaridad y de que exista un sentido fuerte y renovado de humanidad común.

Para concluir, en este sentido quisiera alentar a los países donantes a que aumenten su asistencia oficial para el desarrollo y promuevan programas innovadores de índole financiera y de alivio de la deuda para los países más afectados por la inseguridad alimentaria en la crisis mundial actual.

## Anexo VI

### **Declaración de la Misión Permanente de Estonia ante las Naciones Unidas**

Quisiera dar las gracias a todos los ponentes por sus exposiciones informativas.

Como todos recordarán, hace dos años aprobamos por unanimidad la resolución 2417 (2018), en la que se reconocía el vínculo existente entre los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y la hambruna.

La mayoría de las personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo viven en países afectados por conflictos armados, que ejercen consecuencias devastadoras para sus civiles y a menudo obstaculizan gravemente las operaciones de socorro humanitario. Esos conflictos son la razón por la que las personas se ven obligadas a sobrevivir con la ayuda que reciben de la asistencia de emergencia. Al mismo tiempo, dificultan enormemente la labor del personal de asistencia humanitaria. No se puede incidir lo suficiente en la importancia que reviste el acceso seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria a los civiles en los conflictos armados. Estonia aprecia sumamente el trabajo que realiza todo el personal humanitario y sanitario que trabaja en primera línea, el cual sigue desempeñando su labor en circunstancias ya de por sí difíciles y que ahora se han agravado aún más a consecuencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Hoy en día, cuatro de las peores crisis alimentarias tienen lugar en la República Democrática del Congo, el Yemen, el nordeste de Nigeria y Sudán del Sur, y el Afganistán, Somalia y Burkina Faso los siguen de cerca. El denominador común es el conflicto armado. Además, este año un nuevo enemigo ha causado estragos en esos países: la COVID-19. La pandemia, unida a desastres naturales como las langostas del desierto y las inundaciones, ha agravado la situación en esos entornos vulnerables hasta tal punto que en los cuatro países podría producirse una situación de hambruna.

A lo largo de los años, Estonia ha apoyado al Programa Mundial de Alimentos, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la prestación de asistencia urgente a esos cuatro países. Seguiremos cumpliendo con la parte que nos corresponde. Sin embargo, se requiere una respuesta integral para abordar las causas fundamentales de la hambruna provocada por los conflictos y la inseguridad alimentaria generalizada y brindar a las personas una posibilidad real de dejar tras de sí la terrible situación en la que se encuentran. Nosotros, los miembros de la comunidad internacional, debemos seguir avanzando en el diálogo con miras a hallar soluciones políticas, mitigar las crisis económicas y hacer frente a las privaciones con objeto de ayudar a poner fin a los conflictos y la violencia. De lo contrario, seguimos abordando los síntomas sin prestar atención a la enfermedad.

A ese respecto, aprovecho esta oportunidad para reiterar el pleno apoyo de Estonia al llamamiento hecho por el Secretario General en favor de un alto el fuego mundial y para exhortar a todas las partes en los conflictos armados a que acaten lo dispuesto en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

**Anexo VII****Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Francia ante las Naciones Unidas, Nathalie Broadhurst Estival**

[Original: francés e inglés]

Me gustaría comenzar dando las gracias a Mark Lowcock, David Beasley y Qu Dongyu por sus exposiciones informativas sumamente exhaustivas.

Las cifras que acaban de presentar son absolutamente alarmantes: el riesgo de hambruna sigue aumentando. Sabemos que existen muchas causas: los conflictos, el cambio climático y en la actualidad la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como la crisis económica resultante, están contribuyendo al aumento diario del número de personas que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición. El número de países afectados por el riesgo de hambruna es sumamente preocupante. Entre ellos se incluyen la República Democrática del Congo, el Yemen, el nordeste de Nigeria y Sudán del Sur. La situación también es sumamente preocupante en el Sahel, en particular en Burkina Faso.

Por consiguiente, es preciso adoptar medidas urgentes. En primer lugar —y esta será mi primera observación—, solo mediante una acción colectiva coordinada e integrada lograremos evitar un desastre humanitario. Los Estados, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las instituciones financieras internacionales deben movilizarse para reducir el riesgo de hambruna.

La cooperación entre todos esos agentes, tanto los humanitarios como los de desarrollo, resulta indispensable. Como sabemos, no se trata solo de proporcionar ayuda alimentaria, por muy importante que sea. También es necesario fortalecer los sistemas de producción nacionales y locales y promover redes de protección social que ayuden a las personas más vulnerables a evitar el riesgo de hambruna y, sobre todo, a satisfacer sus necesidades alimentarias de forma digna. La crisis alimentaria hace necesario que reforcemos la resiliencia de los sistemas alimentarios y aceleremos la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, como se ha subrayado, debemos reforzar los mecanismos de prevención y alerta temprana con miras a anticipar, prevenir y mitigar mejor los efectos de las crisis alimentarias. Ello conlleva la recopilación de datos fiables en tiempo real.

A través del apoyo bilateral y multilateral, Francia seguirá trabajando para alcanzar ese objetivo y realizar todos los esfuerzos necesarios. Hemos aumentado la financiación para la ayuda alimentaria de aproximadamente 40 millones de euros en 2019 a más de 50 millones de euros en 2020. La seguiremos aumentando el año que viene. Además, Francia está movilizando actualmente a sus asociados europeos para reforzar la respuesta del Equipo Europa en la esfera de la seguridad alimentaria y la nutrición —centrándonos especialmente en África, región que nos preocupa especialmente— en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos, incluidos los presupuestarios, han sido subrayados por todos.

En segundo lugar, debemos hacer todo lo posible para garantizar el cumplimiento absoluto del derecho internacional humanitario. En muchas intervenciones se ha hecho hincapié en que el uso de la hambruna como método de guerra constituye un crimen de guerra con arreglo al derecho penal internacional y no debe quedar impune. Además, no nos cansaremos de repetir que todas las partes deben garantizar la protección de los civiles, incluido el personal humanitario y sanitario, así como de la infraestructura civil. No debemos transigir en lo que respecta a esa cuestión.

Por último, prevenir la hambruna conlleva garantizar el acceso humanitario seguro y sin trabas a todos los necesitados. A ese respecto, es esencial acelerar la aplicación de la resolución 2532 (2020) a través de un alto el fuego y de una pausa humanitaria.

Tenemos la responsabilidad colectiva y la obligación moral de evitar una nueva tragedia humanitaria en caso de que se materialice el riesgo de hambruna. Si bien los conflictos siguen siendo el principal factor causante de las crisis alimentarias, debemos redoblar los esfuerzos para hallar soluciones políticas duraderas a todos esos conflictos. El Consejo puede contar con el apoyo inquebrantable y constante de Francia.

## Anexo VIII

### **Declaración del Representante Permanente Adjunto de Indonesia ante las Naciones Unidas, Muhsin Syihab**

Ante todo, Indonesia da las gracias a la Presidencia del Consejo de Seguridad por haber convocado la reunión de hoy. También deseo dar las gracias a todos los ponentes por sus completas y esclarecedoras exposiciones informativas.

Antes del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se estimaba que 690 millones de personas, casi el 10 % de la población mundial, padecían hambre. Alrededor del 75 % de las personas malnutridas del mundo viven en zonas de conflicto. De nuevo, esta era la situación antes del brote de COVID-19.

Me sumo a lo que el Secretario General Adjunto señaló en su exposición informativa de septiembre (S/2020/897, anexo III), en el sentido de que se necesitan medidas concretas para romper el círculo vicioso entre el conflicto armado y la violencia y la inseguridad alimentaria. Las recomendaciones que figuran en su informe son un buen punto de partida para centrarnos en nuestras acciones de cara al futuro.

La protección de los civiles seguirá siendo la máxima prioridad de Indonesia, y debería ser siempre el objetivo principal del Consejo de Seguridad. La aplicación de la resolución 2417 (2018) es cada vez más pertinente, sobre todo en tiempos de COVID-19. Permítaseme que me centre en los aspectos siguientes.

En primer lugar, la hambruna nunca debe utilizarse como método de guerra. Todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, algo que también ha mencionado el Secretario General Adjunto Lowcock, al igual que otros miembros del Consejo. Las partes deben adherirse al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial y de la facilitación del acceso de la asistencia humanitaria durante la pandemia de COVID-19. Pese a ello, las partes más activas en la mayoría de los conflictos actuales continúan infringiendo el llamamiento del Secretario General. Por otro lado, los ataques contra trabajadores humanitarios e instalaciones médicas siguen utilizándose para interrumpir de manera deliberada el acceso humanitario.

En segundo lugar, la cooperación internacional es fundamental para proteger a los civiles. Tenemos que subsanar la brecha existente entre la responsabilidad de los países de proteger a los civiles y su capacidad para lograrlo. Los países mencionados en el *Informe mundial sobre las crisis alimentarias* de 2020, entre ellos la República Democrática del Congo, el Yemen, Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, Burkina Faso y el Afganistán, necesitan apoyo internacional, incluso mediante asistencia técnica y financiera, que es totalmente indispensable para que puedan desarrollar sus capacidades.

Es lamentable que la respuesta humanitaria cuente con menos del 35 % de la financiación requerida. En la República Democrática del Congo, ese porcentaje se reduce al 22 %, ya que un número abrumador de personas, 21,8 millones, padecen inseguridad alimentaria aguda. En contraste, cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Nos parece importante citar esas estadísticas para situar el debate de hoy en el contexto adecuado. El Consejo debe ser capaz de adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de los países para proteger a los civiles, lo que incluye la seguridad alimentaria.

En tercer lugar, el imperativo de proteger a los civiles debe estar integrado en todo el proceso de paz, desde la prevención del conflicto y el mantenimiento de la paz hasta la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible. Para que la paz prospere, es evidente que se necesita un desarrollo sostenible. Es una cuestión de sinergia, incluso entre los órganos y organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de esta

cuestión en particular. Por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la arquitectura de consolidación de la paz de las Naciones Unidas son instrumentos a nuestra disposición para lograr ese fin. Utilicémoslos.

Para concluir, Indonesia mantendrá su actual determinación de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, como propósito y principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Ese es nuestro empeño colectivo. Es hora de dar un paso adelante, no de retroceder. Nadie debe quedar atrás. Nadie debe quedar con hambre.

**Anexo IX****Declaración del Representante Permanente del Níger ante las Naciones Unidas, Abdou Abarry**

[Original: francés]

Por mi parte, quisiera también dar las gracias a los Sres. Mark Lowcock, Qu Dongyu y David Beasley por sus exposiciones informativas complementarias sobre la evolución de la situación alimentaria en la República Democrática del Congo, el nordeste de Nigeria, Sudán del Sur y el Yemen, donde, según el *Informe mundial sobre las crisis alimentarias* de 2020, el 53 % de la población se enfrenta a una crisis alimentaria.

Nos conmueven en grado sumo los reiterados e impactantes testimonios presentados ante el Consejo de Seguridad sobre la difícil situación que vive esa población, expuestas desde hace demasiado tiempo a las crisis alimentarias. Dichas crisis se han visto agravadas en las últimas semanas por las importantes inundaciones que han tenido lugar en el Sahel, los efectos de la guerra en el Yemen y las crisis en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. En todas esas situaciones, la población se ha visto obligada a abandonarlo todo para salvar la vida, en los casos en que ello aún era posible. En nombre de mi país, permítaseme que reitere mis condolencias por las víctimas inocentes de todas esas catástrofes.

En las últimas semanas, mi país, el Níger, ha sufrido unas graves inundaciones que, según las estimaciones más recientes, han afectado a más de 350.000 personas. Familias enteras han perdido sus medios de subsistencia. La población expuesta a múltiples tipos de vulnerabilidad, en particular los refugiados y los desplazados internos, tampoco se ha librado de las consecuencias: 9.000 personas que están bajo la protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados necesitan albergue a raíz de las inundaciones. En un momento en que deliberamos sobre la protección de los civiles en relación con la inseguridad alimentaria, los efectos combinados del cambio climático y los conflictos nos recuerdan hasta dónde puede llegar el efecto humanitario para esa población.

En la nota dirigida al Consejo de Seguridad por el Secretario General el 4 de septiembre de 2020 se nos recuerda la gravedad de la situación, así como el mayor riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria generalizada en cuatro países afectados por un conflicto: en total, 43,5 millones de personas, entre ellas, 15,9 millones en el Yemen, 15,6 millones en la República Democrática del Congo, 7 millones en Sudán del Sur y 5 millones en el nordeste de Nigeria.

Hoy en día los conflictos son la principal causa de hambre aguda en el mundo y obligan a las personas a huir y abandonar campos, ganado, propiedades y demás medios de sustento. Ello exacerba la inseguridad alimentaria, tanto para quienes se convierten en desplazados forzosos como para las comunidades de acogida, que a menudo son las que brindan socorro, a pesar de que, con mucha frecuencia, disponen de recursos limitados.

Quisiera recordar, por ejemplo, que en la reunión que celebramos con arreglo a la fórmula Arria el 15 de julio, todos los ponentes ilustraron de manera unánime, con testimonios impresionantes, el estrecho vínculo existente entre las actividades de los grupos armados en la región de los Grandes Lagos, los desplazamientos masivos de la población y la situación de inseguridad alimentaria a la que esta se ve expuesta. Al igual que la población del Sahel, Sudán del Sur y el Yemen, esa población, atrapada por los conflictos armados y las actividades de los grupos terroristas, necesita con urgencia asistencia humanitaria. Las mujeres y los niños, en particular, siguen pagando un precio muy elevado; en 55 países de todo el mundo, casi 17 millones de niños menores de cinco años se encuentran gravemente malnutridos. Esta es una situación preocupante y que exige una actuación urgente.

Cabe decir que los diversos factores relacionados con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) han agravado, como sabemos, los problemas existentes en esas regiones ya duramente afectadas por los conflictos. La escasez de mano de obra ha afectado de manera considerable tanto a la producción agrícola como al procesamiento de las cosechas. Las perturbaciones debidas a los bloqueos de los transportes y a las medidas de cuarentena han impedido a los agricultores tener acceso a los mercados, han obstaculizado la asistencia humanitaria y, por consiguiente, han dificultado la distribución urgente de asistencia vital a los refugiados y las personas desplazadas. Ante los múltiples desastres que afrontan, los tormentos de los conflictos armados, los riesgos de una propagación de la pandemia de COVID-19, es más que urgente adoptar medidas para evitar tener que ser testigos de una tragedia todavía mayor.

A ese respecto, quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir un sincero homenaje a todos los trabajadores humanitarios por sus notables esfuerzos encaminados a proporcionar un salvavidas a esas población y contribuir a la protección de las comunidades vulnerables, especialmente en este momento de la pandemia de COVID-19. Llevan a cabo esa labor con dedicación y compromiso, a menudo, lamentablemente, a riesgo de sus vidas.

Para que la respuesta humanitaria sea eficaz, deben movilizarse aún más recursos, asegurando que se utilicen mejor y eliminando todos los obstáculos y librando la asistencia humanitaria de toda consideración de índole política. Sobre ese tema, agradezco al Sr. David Beasley su excelente alegato.

Como todos admiten, la forma más eficaz de proteger a los civiles es previniendo los conflictos. La prevención consiste ante todo en determinar y abordar las vulnerabilidades crónicas y profundas que afectan a esos países mediante una actuación concertada de los Gobiernos, la comunidad humanitaria y los agentes de desarrollo. Como ha dicho el Presidente de la República del Níger, Excmo. Sr. Mahamadou Issoufou, el objetivo de “hambre cero” establecido por la comunidad internacional para el año 2030 está a nuestro alcance. Por su parte, desde 2011, el Níger, a través de la Iniciativa 3N, Los Nígerinos Alimentan a los Nígerinos, está ejecutando un programa para pasar de las soluciones de emergencia a las soluciones estructurales, que han sacado al país del ciclo crónico de inseguridad alimentaria que ha conocido en el pasado.

Para concluir, quisiera recordar que, en mayo de 2018, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2417 (2018), en la que se recomienda a todas las partes a proteger la infraestructura civil esencial para la entrega de asistencia humanitaria y a garantizar el funcionamiento adecuado de los mercados y los sistemas alimentarios en situaciones de conflicto armado. Esa resolución debe seguir guiando nuestros actos para romper, lo antes posible, el ciclo de hambre relacionado con los conflictos que inflige sufrimientos indecibles a las poblaciones civiles ya de por sí vulnerables.

**Anexo X****Declaración del Representante Permanente Adjunto de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Chumakov**

Agradecemos a nuestros ponentes de hoy —el Sr. Mark Lowcock, el Sr. Qu Dongyu y el Sr. David Beasley— el panorama sustantivo que han proporcionado de las tendencias actuales de la seguridad alimentaria en todo el mundo. Los informes pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) sobre la cuestión siempre están en nuestro radar. El reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que dio lugar al debate de hoy, confirma hasta qué punto la situación es alarmante.

En efecto, los países que son objeto de ese informe de la OCHA —a saber, la República Democrática del Congo, el Yemen y Sudán del Sur, junto con la parte nororiental de Nigeria— están padeciendo sufrimiento humano no solo a causa de los problemas de acceso de las personas necesitadas a los alimentos, sino también porque esos Estados han sufrido una inestabilidad general durante bastantes años y últimamente han sido testigos de un agravamiento de la inseguridad. Sin embargo, lamentablemente, esta cuestión es pertinente para diversos países, lo que claramente hace que nuestro debate sea mucho más amplio.

También tomamos nota del énfasis que algunos oradores han puesto en el llamado nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo. A pesar de ser objeto de una promoción tan amplia, ese término carece de una definición clara. Hasta la fecha, no hemos oído ninguna explicación sobre el tipo de nueva dimensión que el concepto aporta a la cooperación existente entre los diferentes organismos sobre el terreno. Dicho esto, aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a todos los trabajadores humanitarios de la República Democrática del Congo, el Yemen, Nigeria y Sudán del Sur por la lucha diaria que libran con un objetivo en mente: ayudar a las personas más necesitadas. Lamentablemente, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) impone dificultades y restricciones adicionales a su labor.

Los conflictos armados no son la única razón del aumento del número de personas con inseguridad alimentaria en el mundo de hoy. En lugar de centrarnos en el Consejo de Seguridad en el vínculo exclusivo entre los conflictos y el hambre, debemos examinar otros factores de la inseguridad alimentaria, a saber, la volatilidad de los precios en el mercado mundial de alimentos, el estancamiento económico mundial, la insuficiente explotación del potencial científico y tecnológico en el ámbito de la agricultura, el déficit de inversiones, la degradación del medio ambiente y, ahora, otro desafío importante, la pandemia de COVID-19. Las medidas económicas unilaterales, que socavan los derechos y la capacidad de desarrollo de los países, también tienen su lugar en esta triste lista.

Por consiguiente, la solución del problema del hambre causada por los conflictos debe buscarse únicamente en el ámbito político. El conjunto de instrumentos del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y de los organismos humanitarios desempeña una función primordial para hacer frente eficazmente a los problemas de la inseguridad alimentaria y desarrollar el potencial industrial y agrícola de los países. Otro aspecto importante es garantizar que todas las partes cumplan el derecho internacional humanitario, que es esencial. El respeto de los principios rectores de las Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria, de conformidad con la resolución 46/182 de la Asamblea General, promueve la comprensión del carácter imparcial de la prestación de la asistencia humanitaria.

La Federación de Rusia considera que la lucha contra la inseguridad alimentaria es de vital importancia. La FAO y el PMA son nuestros principales asociados en esa esfera. Entre 2018 y 2019, asignamos más de 80 millones de dólares a la ayuda

alimentaria de emergencia a través de esas instituciones. En 2020, junto con el PMA, hemos ejecutado un programa de asistencia alimentaria para el Yemen con una financiación de 4 millones de dólares. Este año, proporcionamos 10 millones de dólares en apoyo a la labor de la FAO para luchar contra la plaga de langosta en los países de África oriental, incluido Sudán del Sur.

Para concluir, deseamos reiterar nuestra posición de que cada conflicto es único y que no existe una receta universal para superar las crisis en cada país afectado por un conflicto. En ese sentido, nos adherimos a la posición de que las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria deben abordarse en el Consejo de Seguridad solamente en el contexto del examen de las situaciones de países concretos que plantean una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con un examen minucioso de las causas profundas de esas situaciones. En el fondo, el Consejo ya aborda inevitablemente esas cuestiones en sus debates relativos a las situaciones en la República Democrática del Congo, el Yemen, Sudán del Sur y Nigeria.

## Anexo XI

### **Declaración de la Coordinadora Política de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas, Isis Gonsalves**

Para empezar, San Vicente y las Granadinas agradece a los ponentes sus observaciones aleccionadoras, y encomiamos al Presidente del Consejo de Seguridad por haber convocado el importante y oportuno debate de hoy.

Los peligros del cambio climático, la continua propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la proliferación de las langostas del desierto están borrando hoy en día decenios de progreso en la lucha mundial contra el hambre. Para los grupos vulnerables de los países afectados por conflictos, incluidos los refugiados, los desplazados internos y los que se han convertido en apátridas a raíz de fuerzas políticas, socioeconómicas y medioambientales sobre las que no tienen ningún control, superar la escasez de alimentos resulta una tarea insuperable. Dado que millones de personas sufren de inseguridad alimentaria aguda y de conflictos en la República Democrática del Congo, el Yemen, Sudán del Sur y otros contextos, es preciso hacer más para luchar contra esos flagelos.

En muchas situaciones que figuran en el programa del Consejo de Seguridad, la inseguridad alimentaria aguda y los conflictos están inextricablemente relacionados, y ambos se ven exacerbados por el cambio climático y otros multiplicadores de riesgo. Por ejemplo, el aumento de la intolerancia, la desinformación y la incitación al odio crea un clima de desconfianza en el que surgen los desafíos a la paz y a la seguridad por motivos étnicos, comunitarios y políticos. Un ejemplo de ello son los dolorosos y recurrentes ciclos de conflicto violento entre los pastores Hema y los agricultores Lendu por las antiguas controversias sobre la tierra en el nordeste de la República Democrática del Congo, que provocan un aumento de los desplazamientos y la escasez alimentaria. De manera similar, como resultado de sus seis años de historia de conflictos, ciclos de intensas lluvias e inundaciones y los factores asociados de desplazamiento humano y crisis económica, la seguridad alimentaria en Sudán del Sur se ha deteriorado considerablemente.

En el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus, que puede erosionar aún más los frágiles procesos de paz, se necesita una acción multilateral urgente que reúna a todos los agentes que intervienen en el nexo que existe entre la paz, la seguridad, el desarrollo y la ayuda humanitaria. En el marco de la interrupción de las cadenas de suministro, las restricciones a la circulación y la reducción de la financiación, que dificultan considerablemente las operaciones humanitarias, San Vicente y las Granadinas reitera su pleno apoyo a la resolución 2532 (2020). Una vez más, nos hacemos eco de los llamamientos en favor de un alto el fuego mundial y pedimos que todas las partes en los conflictos armados se comprometan a una pausa humanitaria duradera para garantizar la prestación sostenida de asistencia humanitaria. El derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, no es negociable, y alentamos a todas las partes que estén en condiciones de influir en el curso de los acontecimientos en los países afectados por conflictos a que colaboren para aplicar plenamente la resolución 2532 (2020), respetando al mismo tiempo la soberanía y la integridad territorial de los Estados afectados.

En estos momentos difíciles, existe la imperiosa necesidad de que la comunidad de donantes, incluidas las instituciones financieras internacionales, aumente la asistencia a los países afectados por conflictos y se asegure de que los organismos humanitarios reciban la financiación necesaria para ejecutar plenamente sus planes de respuesta y continuar su labor de salvar vidas. Del mismo modo, alentamos a que se conceda un mayor alivio de la deuda. Para cumplir con nuestra promesa colectiva de poner fin al hambre a más tardar en 2030, todo el sistema de las Naciones Unidas, incluidos los Estados Miembros y las organizaciones regionales y subregionales, debe redoblar sus esfuerzos por proteger a los que se han vuelto vulnerables a causa de los conflictos y el hambre.

## Anexo XII

### **Declaración de la Misión Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas**

Sr. Presidente: Le agradezco que haya convocado esta reunión informativa para abordar el hambre provocada por los conflictos. También quisiera dar las gracias al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia y Jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Sr. Mark Lowcock, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Sr. Qu Dongyu, y al Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Sr. David Beasley, por sus esclarecedoras exposiciones informativas y por haber señalado esas realidades a nuestra atención.

A Sudáfrica le preocupa mucho el número cada vez mayor de personas que padece de malnutrición e inseguridad alimentaria en todo el mundo, incluidos el continente africano y Oriente Medio. El hambre aumenta y millones de personas corren peligro. El hambre es tanto una causa como un efecto de la guerra y los conflictos y sigue siendo una amenaza preocupante para la paz y la seguridad internacionales. A ese respecto, el Consejo de Seguridad tiene la clara responsabilidad de actuar cuando esa situación está vinculada a amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

Los conflictos armados tienen una repercusión devastadora en los medios de vida. Interrumpen los sistemas alimentarios, causan desplazamientos masivos de personas y desencadenan la inseguridad alimentaria. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha exacerbado la inseguridad alimentaria y nutricional ya existente y ha llevado a las comunidades vulnerables a una situación de mayor hambre y pobreza. Como resultado de la pandemia, los países que dependen en gran medida de la asistencia humanitaria, incluida la ayuda alimentaria básica, se enfrentan ahora a una triple carga.

Los civiles son las principales víctimas de esos círculos viciosos de inseguridad alimentaria y conflictos armados, en particular las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. A ese respecto, deseamos hacer hincapié en la difícil situación de los desplazados internos, los refugiados y los migrantes que se ven sometidos a condiciones de vida difíciles durante las situaciones de conflicto y dependen completamente de la asistencia humanitaria.

Los civiles, la infraestructura esencial, los convoyes de ayuda y los trabajadores humanitarios siguen siendo objetos de ataque durante las situaciones de conflicto. Por consiguiente, subrayamos la importancia de garantizar la prestación rápida, sin trabas e imparcial de la ayuda y la asistencia humanitarias a todos los que las necesitan, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional humanitario y la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.

En ese sentido, Sudáfrica desea valorar y encomiar los esfuerzos de las Naciones Unidas, su personal, sus asociados en la ejecución y sus organismos por sus ingentes esfuerzos para prestar la ayuda y la asistencia necesarias, en particular en situaciones de conflicto.

Es necesario hacer más para reducir y prevenir el hambre provocada por los conflictos. Permítaseme destacar los elementos siguientes para someterlos a la consideración del Consejo de Seguridad.

En primer lugar, se deberían utilizar con mayor eficacia los sistemas de prevención y alerta temprana para prevenir los casos de hambruna. Ello se puede hacer integrando los indicadores sobre los alarmantes niveles de inseguridad alimentaria y la restricción del acceso humanitario a la población en los informes presentados al Consejo de Seguridad de las operaciones de mantenimiento de la paz y los países.

En segundo lugar, todas las partes en conflicto deben garantizar su pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Los responsables por las violaciones de ese derecho internacional, que impiden hasta la prestación de asistencia alimentaria o socavan los medios de producción de alimentos durante los conflictos, deben ser enjuiciados.

En tercer lugar, la asistencia humanitaria prestada en las zonas de conflicto debe tener en cuenta el género y la edad y seguir respondiendo a las diferentes necesidades de la población, asegurando así que esas necesidades se integren en las respuestas humanitarias.

En cuarto lugar, el aumento y la prestación de servicios de salud adecuados en las zonas de conflicto, por ejemplo, para tratar las enfermedades infecciosas, deberían formar parte de una estrategia para erradicar el hambre.

Por último, las sanciones económicas impuestas a los países en conflicto podrían dar lugar, de manera imprevista, al hambre relacionada con los conflictos, ya que los civiles podrían tener menos acceso a la nutrición y los medicamentos y podrían afrontar un aumento de los precios de los alimentos debido al deterioro de la economía. A ese respecto, Sudáfrica reitera su apoyo al llamamiento del Secretario General para que se dejen sin efecto todas las medidas económicas impuestas a los países en conflicto, en particular debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. La imposición de medidas coercitivas unilaterales también repercute en los países en conflicto, y pedimos a los países que imponen esas medidas que levanten esas sanciones.

Permítaseme concluir destacando que, para invertir el hambre provocada por los conflictos, es imprescindible que la comunidad internacional se oponga firmemente al uso del hambre como arma de guerra inaceptable y se asegure de que los que sufren esas tácticas reciban la asistencia humanitaria que necesitan.

**Anexo XIII****Declaración del Encargado de Negocios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas, Jonathan Allen**

Quiero dar las gracias a la República Dominicana por su liderazgo para convocar la reunión de hoy. Permítaseme también agradecer a nuestros tres principales responsables de las Naciones Unidas sus exposiciones informativas en el marco de la resolución 2417 (2018). Es importante que nos reunamos hoy para examinar el papel que desempeñamos en la prevención de daños. De eso se trata la resolución 2417 (2018), por lo que me complace mucho que se celebre hoy esta reunión.

La perspectiva de hambruna en el siglo XXI es un fracaso provocado por el hombre y que se puede evitar, como han señalado nuestros ponentes. El vínculo entre los conflictos y el hambre no puede ser más claro: los conflictos armados y la violencia desempeñan un papel fundamental para denegar a los civiles sus derechos básicos a la alimentación y a la vida.

El Reino Unido comparte las graves preocupaciones que se plantean sobre el creciente riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria aguda en el Yemen, el nordeste de Nigeria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. También nos preocupa el deterioro de la situación de la seguridad alimentaria en varios otros países afectados por conflictos, entre ellos y Somalia, Burkina Faso y el Afganistán. Es evidente que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se ha agravado aún más por esas emergencias humanitarias, aumentando las vulnerabilidades preexistentes.

Los agentes armados violan los derechos y la seguridad de la población civil, al desplegar tácticas que utilizan el sufrimiento de los civiles como arma de guerra y hacer caso omiso de manera deliberada de su obligación de proteger a los civiles en virtud del derecho internacional humanitario. Esto incluye obstaculizar el acceso humanitario al apoyo vital mediante las trabas burocráticas, los retrasos en la entrega de la ayuda, los bloqueos y los obstáculos en la vigilancia. No obstante, como sabemos por nuestros debates, es un hecho lamentable y trágico que los trabajadores humanitarios, que tratan de prestar servicios a la población en muchos teatros diferentes, sean objeto de ataques deliberados.

El creciente riesgo de hambruna y de inseguridad alimentaria aguda en las zonas de conflicto exige la adopción de medidas inmediatas sobre el terreno, en primer lugar, por parte de los Gobiernos y los grupos armados no estatales. Con respecto a los países mencionados en la reunión informativa de hoy, quiero hacer algunas breves observaciones.

En cuanto al Yemen, solo puede evitarse la hambruna mediante una asistencia financiera externa urgente al Banco Central del Yemen para mejorar la asequibilidad de los alimentos y los medicamentos a través de la financiación inmediata de la respuesta humanitaria de las Naciones Unidas, que no cuenta con recursos suficientes, y el avance urgente hacia un alto el fuego en todo el país. Creo que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proporcionar financiación a la respuesta dirigida por las Naciones Unidas, en particular los que se han comprometido a hacerlo. Por supuesto, corresponde principalmente a las partes yemeníes aceptar con urgencia las propuestas de paz de las Naciones Unidas.

En el nordeste de Nigeria, el hecho de que los grupos armados no estatales del nordeste han perpetrado ataques deliberados contra los trabajadores de asistencia humanitaria constituye una violación abominable e inaceptable del derecho internacional humanitario. Es esencial que las Naciones Unidas y el Gobierno de Nigeria trabajen en estrecha colaboración para garantizar la plena protección de los civiles, así como el avance del acceso humanitario.

En Sudán del Sur, seguimos constatando un proceso de paz estancado y una escalada de la violencia a nivel subnacional. Una vez más, es fundamental que el Gobierno de Sudán del Sur y también todos los grupos no estatales garanticen el acceso sin restricciones a los trabajadores humanitarios y reduzcan el riesgo al que se enfrentan los trabajadores de asistencia humanitaria en ese país.

En la República Democrática del Congo, es preciso intensificar los esfuerzos políticos y de seguridad, en coordinación con las autoridades regionales, nacionales y subnacionales, para hacer frente a los factores que impulsan el conflicto.

No obstante, en sentido más general, la comunidad internacional debe unirse. Debemos coordinar y priorizar nuestros esfuerzos. Debemos romper el ciclo de conflictos armados y crisis humanitarias. Tenemos la responsabilidad colectiva de actuar con rapidez, pero como hemos escuchado hoy, nuestras contribuciones no están a la altura de las necesidades.

Este mes, el Reino Unido anunció un llamamiento a la acción para prevenir la hambruna. Este llamamiento incluyó el anuncio del desembolso de más de 150 millones de dólares en concepto de ayuda adicional, con objeto de aliviar el hambre extrema que afecta a más de 6 millones de personas. Digo adicional, ya que el Reino Unido se enorgullece de ser uno de los principales donantes humanitarios no solo de los llamamientos de países concretos, sino también de los fondos básicos, como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. Creo que en 2020, el Reino Unido ha aportado algo más de 1.000 millones de dólares en asistencia humanitaria. Hemos aportado poco menos de 1.000 millones de dólares para hacer frente a la COVID-19.

El Reino Unido también ha anunciado el nombramiento de Nick Dyer como primer Enviado Especial del Reino Unido para Prevención de la Hambruna y Asuntos Humanitarios. Exhortamos a todos los Estados Miembros a que movilicen con celeridad todos los medios financieros en apoyo de una acción humanitaria rápida antes de que sea demasiado tarde.

Nosotros, los miembros del Consejo de Seguridad, también debemos desempeñar nuestro papel. No solo nos corresponde aumentar nuestra financiación, sino que también podemos movilizar nuestros esfuerzos diplomáticos. Podemos utilizar nuestra influencia en los agentes sobre el terreno para insistir en el acceso humanitario sin trabas y garantizar la protección de los civiles a ese respecto.

Tras haber encomiado esta reunión informativa de hoy y la nota blanca que la precedió, quisiera referirme a lo que espero sea una expectativa común, a saber, que las Naciones Unidas sigan informando sobre esas situaciones y sobre otras que son motivo de preocupación. En ese contexto, deben incluir actualizaciones sobre los progresos realizados en relación con las recomendaciones de las Naciones Unidas, así como pruebas sobre los delitos cuando sea posible reunirlos, para aumentar la rendición de cuentas y, como miembros del Consejo, poder centrarnos en los autores de esos actos.

Si el riesgo de hambruna persiste, el Consejo debe adoptar medidas para mejorar la protección de los civiles y corregir la denegación del acceso humanitario en cualquier situación que se produzca. Consideramos que el Consejo debe seguir participando plenamente en esta agenda en las próximas semanas. Consideramos también que debemos reanudar este debate en el transcurso del otoño y nuestros ponentes nos digan si la situación ha mejorado o empeorado, y examinar qué otras medidas podríamos adoptar

La hambruna y el hambre no deben ser consecuencias inevitables de la guerra y el conflicto. Una declaración de hambruna significa que ya es demasiado tarde para salvar vidas. Es un fracaso colectivo, incluso de nuestra parte. No debemos quedarnos de brazos cruzados y permitirnos llegar a ese punto. Debemos actuar ahora para evitar una catástrofe en los meses venideros.

**Anexo XIV****Declaración de la Representante Permanente Adjunta Interina de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Cherith Norman-Chalet**

Quiero agradecer a Mark Lowcock, David Beasley y Qu Dongyu por sus exposiciones informativas. La Embajadora Craft envía saludos y lamenta no haber podido permanecer durante toda la reunión informativa, pero agradece sobremedida la labor que todos realizan. Las exposiciones informativas que presentaron hoy son, y somos conscientes de ello, graves advertencias, no solo actualizaciones, son hoy graves advertencias en cuanto a las desastrosas consecuencias de la colisión de los conflictos y el hambre. Los Estados Unidos acogen con beneplácito este importante debate en vísperas de la semana de alto nivel de la Asamblea General, durante la cual hacemos una reflexión colectiva sobre la situación mundial y examinamos las formas de utilizar nuestras voces y acciones para mejorar la vida de las personas.

Hace poco más de dos años, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2417 (2018), que estableció claramente los vínculos entre la inseguridad y el hambre. En estos últimos dos años, esa conexión se ha puesto de relieve. La inseguridad y la violencia, que tienen diversas fuentes, desde el terrorismo hasta la violencia política, tienen profundas repercusiones en la población vulnerable. Las familias están desgarradas. Los medios de vida están trastocados. El estado de derecho se desmorona. La producción de alimentos está perturbada. Los centros sanitarios y las escuelas cierran. Como resultado, la inseguridad alimentaria aumenta de manera impresionante.

Por supuesto, no podemos hablar del hambre sin abordar también las profundas repercusiones de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En un entorno de conflicto es intrínsecamente difícil ganarse la vida, poner comida en la mesa, ir a la escuela o consultar a un profesional médico. Resulta mucho más difícil para quienes se enfrentan a una serie de desigualdades sistémicas, como las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidad y las personas desplazadas. Como nos dijo acertadamente David Beasley en abril (véase S/2020/340), y de nuevo hoy, los problemas económicos y sanitarios que se derivan de la COVID-19 empeorarán si las autoridades no abordan tanto las causas fundamentales del conflicto como las fragilidades de la sociedad que han quedado expuestas por la pandemia.

La situación imperante en los cuatro países en que nos centramos hoy aquí, a saber, Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Yemen, pone de relieve cuán difícil es abordar la inseguridad alimentaria y el hambre cuando el conflicto se generaliza. En todos esos contextos, destacamos la necesidad de examinar con seriedad las causas profundas de los conflictos y de utilizar medios pacíficos para poner fin a la impunidad y romper los ciclos de violencia.

Además, los Estados Unidos subrayan que las partes en un conflicto armado deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a los bienes de carácter civil y a los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

En la República Democrática del Congo, los desplazamientos continuos y a largo plazo provocados por el conflicto, agravados por múltiples emergencias de salud pública, han hecho que millones de congoleños padezcan hambre. El conflicto y la violencia persistentes en varias provincias, entre ellas Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica, han provocado que millones de familias abandonaran sus hogares, medios de vida y sistemas de apoyo. La violencia continua en regiones remotas, a menudo inaccesibles, hace que sea aún más difícil que las autoridades locales, con el apoyo de la comunidad internacional, presten asistencia vital. Instamos a que se

preste mayor atención a la dimensión regional del conflicto de los Grandes Lagos, en donde los Jefes de Estado podrían pasar la página de una historia trágica potenciando la integración económica regional.

En Nigeria, 1,9 millones de personas en el estado de Borno no pueden regresar a sus hogares debido al terror constante que suscitan los grupos armados no estatales y los grupos terroristas, entre ellos Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, que hacen caso omiso del derecho internacional humanitario y de la neutralidad de quienes arriesgan la vida para ayudar a los demás. Por ejemplo, en este último año, 15 trabajadores humanitarios en el estado de Borno han sido víctimas de crímenes atroces perpetrados por grupos terroristas. La constante inseguridad impide que las personas acudan a sus granjas o mercados locales o accedan a la atención de la salud y a los servicios sociales. El miedo y la violencia también impiden que los agentes humanitarios lleguen a los grupos más vulnerables de la población.

Pese a los atisbos de esperanza, en Sudán del Sur se han logrado pocos avances en favor de la población desde que el Consejo de Seguridad debatió por última vez hace dos años sobre el conflicto y el hambre. La violencia actual en todo el país, agravada por las inundaciones, la COVID-19 y los impedimentos en materia de acceso, pone en peligro la vida de miles de personas. La magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda son extremas y se encuentran en los niveles más altos registrados en Sudán del Sur desde 2014. También nos preocupan profundamente los informes de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur en los que se menciona la inanición deliberada a la que se somete a civiles, pues las partes en el conflicto obstruyen la ayuda humanitaria sobre la base de los supuestos orígenes étnicos o creencias políticas. Esos actos pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Los alimentos nunca deben utilizarse como arma de guerra.

A los Estados Unidos les siguen preocupando profundamente el deterioro de las perspectivas económicas en el Yemen, la injerencia de los huzíes en las operaciones de ayuda y los grandes déficit de financiación que están provocando un aumento de los niveles de inseguridad alimentaria. Reiteramos nuestro llamamiento a los huzíes para que dejen de obstaculizar las operaciones de ayuda y exhortamos a todos los donantes a que aumenten sus contribuciones y desembolsen fondos para esta emergencia.

Los Estados Unidos se enorgullecen de ser el mayor donante de asistencia humanitaria, incluso para los cuatro países que suscitan preocupación, que han recibido más de 2.000 millones de dólares de asistencia en 2020 del pueblo estadounidense. Solo en el Yemen, los Estados Unidos han respondido con casi 200 millones de dólares adicionales desde la última conferencia de promesas de contribuciones para el Yemen celebrada en junio. Damos las gracias a los presentes y a otros Estados Miembros de las Naciones Unidas que han contribuido de manera similar con recursos en apoyo de la población más vulnerable. Seguimos instando a los donantes que aún no han desembolsado sus promesas de contribuciones para 2020 a que lo hagan rápidamente, así como a que consideren la posibilidad de prestar apoyo financiero adicional para prevenir la hambruna antes de que sea irreversible.

El Gobierno de Trump seguirá centrándose en esa cuestión y continuará encabezando la gestión de ese asunto. Sé que los otros miembros del Consejo se sumarán a nosotros. Podemos hacer que el mundo sea mejor si trabajamos juntos en pro de un objetivo común y ponemos fin al hambre y a la inseguridad alimentaria de la población vulnerable de todo el mundo. Esa es, en efecto, una noble causa por la que luchar.

**Anexo XV****Declaración del Representante Permanente de Viet Nam ante las Naciones Unidas, Dang Dinh Quy**

Quisiera dar las gracias al Secretario General Adjunto Lowcock, al Sr. Qu Dongyu y al Sr. Beasley por sus exposiciones informativas. Permítaseme también dar las gracias a sus equipos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, respectivamente, por los incansables esfuerzos que despliegan sobre el terreno.

Viet Nam se sumó a la República Dominicana y a otros países para pedir la convocación de la sesión informativa de hoy a fin de estudiar la alarmante situación del hambre inducida por los conflictos, en particular en lo que respecta a las cuatro crisis alimentarias más importantes de las que informa la OCHA, a saber, las situaciones en la República Democrática del Congo, el Yemen, la zona nororiental de Nigeria y Sudán del Sur. En esos casos, la fragilidad de la paz y la seguridad a distintos niveles se ve agravada por factores como la pobreza, la inseguridad alimentaria, las enfermedades, los desastres naturales, los efectos negativos del cambio climático, el acceso restringido a la ayuda y la financiación y las perturbaciones económicas causadas por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

El Programa Mundial de Alimentos ha estimado que, para finales de 2020, 265 millones de personas se enfrentarán a inseguridad alimentaria aguda. Esa cifra es preocupante. Sin una población sana, ¿cómo se pueden sostener la paz y el desarrollo? Con frecuencia, afirmamos que los niños son el futuro. ¿Cuál será el futuro que le espera a un país en el que millones de niños padecen malnutrición aguda y corren el riesgo de morir antes de cumplir los cinco años? Los conflictos y la violencia siguen siendo uno de los principales factores que provocan la inseguridad alimentaria. Destruyen las cosechas, el ganado y la infraestructura alimentaria esencial e impiden la asistencia humanitaria. A su vez, la inseguridad alimentaria puede generar tensiones, prolongar los conflictos, instigar otros nuevos y dificultar la reconstrucción. Mi delegación reitera la necesidad de romper el círculo vicioso que se produce entre los conflictos armados y el hambre y desea destacar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, el respeto del derecho internacional humanitario es obligatorio en todas las situaciones de conflicto armado. Hacemos un llamamiento a todas las partes en los conflictos armados para que garanticen la protección de los civiles, en particular de las mujeres, los niños y los más vulnerables; garanticen la asistencia humanitaria sin obstáculos ni trabas a las personas necesitadas; y garanticen la seguridad de los trabajadores humanitarios imparciales y de los profesionales sanitarios esenciales. Se debe proteger la infraestructura civil indispensable para la agricultura y la producción y distribución de alimentos, que es fundamental para la supervivencia de la población civil.

En segundo lugar, no se logrará una solución sostenible a esas crisis salvo que abordemos las causas profundas de los conflictos y promovamos el diálogo entre las partes pertinentes a fin de encontrar soluciones políticas duraderas. El Consejo de Seguridad debe cumplir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Reiteramos el llamamiento a todas las partes en los conflictos armados para que acaten la exigencia del Consejo de Seguridad de que se ponga fin inmediatamente a las hostilidades a fin de responder a la pandemia de COVID-19.

En tercer lugar, en estos tiempos de pandemia de COVID-19, el hallazgo de una solución a la inseguridad alimentaria en los países en situación de conflicto se torna más difícil. Dado que los recursos tienden a destinarse al plano nacional, resulta crucial reforzar la asistencia humanitaria internacional, en forma de financiación y en

especie, y coordinar nuestros esfuerzos conjuntos. Las organizaciones internacionales y regionales, así como los países de dentro y fuera de las regiones, tienen todos un papel que desempeñar a este respecto. Debemos apoyar a los países pertinentes, especialmente a los afectados por conflictos armados, con objeto de crear resiliencia, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos y mejorar la capacidad de adaptación ante los desafíos mundiales multidimensionales. Es preciso abordar adecuadamente las necesidades de la población vulnerable, especialmente de los niños y las mujeres.

Ha quedado demostrado que la seguridad alimentaria está profundamente relacionada con la seguridad internacional en ciertas situaciones. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los riesgos alimentarios y de seguridad. Ha llegado el momento de fomentar una mayor colaboración entre los Gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, el sector privado y otras partes interesadas para garantizar alimentos accesibles, seguros y nutritivos para todos, especialmente para los más vulnerables que se encuentran en situaciones de conflicto.

---